

**Asamblea General
Consejo de Seguridad**

Distr.
GENERAL

A/47/952*
S/25839*
28 de mayo de 1993
ESPAÑOL
ORIGINAL: ARABE

ASAMBLEA GENERAL
Cuadragésimo séptimo período de sesiones
Tema 10 del programa
MEMORIA DEL SECRETARIO GENERAL SOBRE
LA LABOR DE LA ORGANIZACION

CONSEJO DE SEGURIDAD
Cuadragésimo octavo año

Nota verbal de fecha 21 de mayo de 1993 dirigida al Secretario General
por la Misión Permanente de Egipto ante las Naciones Unidas

La Misión Permanente de la República Árabe de Egipto ante las Naciones Unidas saluda atentamente al Secretario General y, con referencia a su nota de fecha 12 de abril de 1993, en que solicitaba los comentarios y sugerencias de los gobiernos sobre la cuestión de la asistencia a terceros países que confrontan perjuicios económicos originados por la imposición de sanciones con arreglo al Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, tiene el honor de presentar a continuación las observaciones y sugerencias del Gobierno de Egipto al respecto.

Introducción

La cuestión de proporcionar asistencia a terceros países que confrontan perjuicios económicos originados por la imposición de sanciones ha cobrado particular importancia, habida cuenta de que el Consejo de Seguridad ha seguido imponiendo sanciones económicas en el marco de su responsabilidad de mantener la paz y la seguridad internacionales y de los problemas que confrontan ciertos países posteriormente a la imposición de las sanciones, al dar cumplimiento a las resoluciones en virtud de las cuales se impusieron dichas sanciones. Por consiguiente, debería examinarse con todo cuidado y detenidamente el objetivo de los autores de la Carta al incorporar las disposiciones del Artículo 50 y debería llegarse a un acuerdo sobre las medidas que han de adoptarse para mitigar el sufrimiento de esos países e impedir que experimenten graves perjuicios.

* Vuelto a publicar por razones técnicas.

1. En primer lugar, debería hacerse hincapié en el principio de participación equitativa en los gastos y responsabilidades del sistema de seguridad colectiva, de modo que ningún país o grupo de países soportara una carga desproporcionada o injustificada debido a su participación en el sistema.

2. La experiencia reciente ha mostrado claramente que es preciso volver a examinar las disposiciones del Artículo 50 de la Carta, y ha quedado demostrado que las instituciones financieras internacionales que existen actualmente son incapaces de satisfacer de manera rápida y eficaz la gran cantidad de reclamaciones presentadas por los países perjudicados. Ello se debe, principalmente, a que esas instituciones carecen de los mecanismos apropiados y los fondos necesarios para satisfacer las peticiones formuladas por los países, lo que es natural, ya que no fueron creadas originalmente con ese propósito. Acaso el testimonio más auténtico de lo expresado son los padecimientos constantes de un gran número de países y su preocupación por elaborar otro sistema que impida que esos problemas se agraven o se repitan.

3. El Artículo 50 de la Carta establece que "... cualquier [otro] Estado, ... , que confrontare problemas económicos [especiales] [originados por la ejecución de dichas medidas], tendrá el derecho de consultar al Consejo de Seguridad acerca de la solución de esos problemas".

Ese derecho de consulta plantea tres problemas fundamentales, a saber:

a) El hecho de que la consulta de un país perjudicado al Consejo de Seguridad es un derecho garantizado por la Carta;

b) El hecho de que la consulta no es una meta en sí misma, sino que el objetivo es resolver los problemas provocados por la imposición de las sanciones;

c) El momento de celebrar la consulta, por cuanto es evidente que, además de celebrar consultas tras la imposición de las sanciones, sin duda sería útil celebrarlas antes de la imposición de las sanciones con los países que puedan resultar perjudicados, como medida preventiva que contribuiría a limitar la gravedad y el alcance de las posibles consecuencias negativas de la imposición de sanciones en la economía de terceros países.

4. A la luz de lo expresado, Egipto propone establecer un mecanismo apropiado que adopte la forma de un comité permanente del Consejo, de conformidad con el Artículo 29 de la Carta, para que desempeñe dos funciones esenciales en su nombre:

En primer lugar, consultar antes de la imposición de las sanciones a los países susceptibles de resultar perjudicados, si bien debería hacerse hincapié en que dicha consulta se limitaría a investigar y determinar la forma más apropiada que habrían de adoptar las sanciones para que logran su objetivo sin causar perjuicios injustificados contra terceros y bajo ninguna circunstancia habría de tener el objetivo de imponer limitaciones al propio principio de las sanciones, que seguiría siendo esencialmente de competencia del Consejo;

/...

En segundo lugar, consultar a los países perjudicados tras la imposición de las sanciones e informar al Consejo al respecto, teniendo en cuenta que el perjuicio relativo puede diferir de un país a otro de acuerdo con la importancia global de la economía y el grado de dependencia respecto de un sector o sectores determinados que puedan resultar afectados por la imposición de sanciones contra otro país. Ello coadyuvará a orientar la asistencia a los países solicitantes en relación con la distribución proporcionada y equitativa de los recursos de que se disponga a esos efectos.

5. Con el objeto de obtener los recursos financieros necesarios para atender las reclamaciones de los países perjudicados, quizás sea apropiado establecer un fondo integrado fundamentalmente por contribuciones prorrateadas basadas en la escala de cuotas para las operaciones de mantenimiento de la paz en calidad de actividades encomendadas por el Consejo de Seguridad. Al mismo tiempo, debería exhortarse a los países a que aportaran contribuciones voluntarias al fondo en carácter de participación en el cumplimiento de las obligaciones inherentes al sistema de seguridad colectiva.

La Misión Permanente de la República Árabe de Egipto ante las Naciones Unidas solicita que la presente nota se distribuya como documento oficial del cuadragésimo séptimo período de sesiones de la Asamblea General, en relación con el tema 10 del programa, y del Consejo de Seguridad.
